



LAS CLAVES

XAVIER BATALLA

¿Sísifo era quebequés?

Parece que los soberanistas quebequeses se han autocondenado al trabajo de Sísifo. Cada vez que la piedra está arriba, las fuerzas desfilen y la piedra comienza a rodar hacia abajo. La primera vez que sucedió esto fue en 1980, cuando el Partido Quebequés de René Lévesque, después de formar gobierno en la provincia francófona en 1976, perdió, con el 40 por ciento de los votos, el primer referéndum sobre la soberanía.

Los soberanistas tardaron quince años en reponer fuerzas. Primero, en 1992, crearon el Bloque Quebequés para participar sólo en las elecciones federales. La empresa fue un éxito, ya que el partido se convirtió en el segundo de Canadá. Y después, en 1994, los independentistas volvieron a recuperar el poder provincial. La piedra volvía a estar casi en la cima, como en 1980. Pero los soberanistas perdieron el referéndum de 1995, cuando la piedra, ya en las manos de Lucien Bouchard, llegó más alto que nunca.

Bouchard dimitió el pasado mes de enero, después de admitir que había fracasado en el objetivo de conducir a la provincia francófona hacia la independencia. La piedra, pues, volvió a rodar. Y su antecesor, Jacques Parizeau, un francófono de "pure laine" que culpó a los inmigrantes de la derrota de 1995, le despidió negándole el pan y la sal: "Fue un extraordinario vendedor de la soberanía hasta el referéndum de 1995, pero no a partir de entonces". Bouchard dimitió después de advertir sobre el peligro de que un sector del nacionalismo se deslice por el plano inclinado de la xenofobia.

Bouchard ha dejado paso ahora a Bernard Landry, su vicepresidente y ministro de Finanzas, cargo desde el que ha saneado las cuentas públicas de la provincia. Es decir, Landry, soberanista de siempre, no como Bouchard, que hizo carrera en el federalista Partido Conservador, asumió el pasado jueves, al ser investido primer ministro, el papel de Sísifo. Pero los sondeos dicen que la mayoría de los quebequeses, cansados de la querrela constitucional, son contrarios a un tercer referéndum.

¿Logrará Bernard Landry, que parecía condenado a ser el eterno "número dos", lo que no pudieron conseguir Lévesque, Parizeau y Bouchard? Landry, de 64 años, pertenece al núcleo duro del soberanismo surgido en el decenio

de los sesenta, cuando, con Lévesque, cofundó el Partido Quebequés. De su cabaña surgió el Bloque Quebequés y fue él quien convenció a Bouchard para que abrazara la causa soberanista. Esta trayectoria hace decir a los federalistas que los independentistas han recuperado con Landry su "viejo discurso radical".

Puede que sea así. Pero no es fácil imaginar al nuevo primer ministro dejándose arrastrar por la prisa. Landry no es tan radical como Parizeau, que disimula mal su inclinación hacia el nacionalismo étnico, pero tampoco es tan moderado como Bouchard. La retórica puede ser distinta, como ya ha demostrado en las últimas semanas: primero, proponiendo una confederación entre "países soberanos: Quebec y Canadá", y después afirmando que "la bandera canadiense es un trazo rojo". Pero retórica al margen, Landry, como político que ya ha visto desfilar a cuatro primeros ministros soberanistas, sabe que las prisas únicamente conducirán a una derrota que puede ser la definitiva para una generación,

ahora en los sesenta años, convencida de que la inmigración no juega a su favor.

Pero hay algo más que separa a Landry de Bouchard. Landry controla el Partido Quebequés como no lo podía hacer Bouchard. Y cuando Landry habla de otra confederación no suena a sospechoso, como resultaba Bouchard para los radicales. Pero Ottawa no está por otra confederación. ¿Es aún posible una tercera vez —una negociación o un referéndum para reformar el federalismo canadiense— que salve la cara y los muebles de las dos partes? La cuestión es cómo logrará Bernard Landry que su arduo trabajo no termine siendo tan inútil como el de Sísifo.

El primer ministro de Quebec, Landry, ni es tan moderado como Bouchard ni duro como Parizeau

EDUARDO MARTÍN DE POZUELO / SANTIAGO TARÍN

El efecto Garzón

El pasado jueves, la Corte Suprema de Chile confirmó el procesamiento de Augusto Pinochet como encubridor de los secuestros y asesinatos cometidos durante la "caravana de la muerte".

Dos días antes, el martes, un juez federal argentino, Gabriel Cavallo, dictaminó la nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final y abrió la puerta para que se iniciaran los procesos contra los responsables de la represión durante el régimen militar en Argentina.

Entre tanto, otro argentino también apellidado Cavallo, Miguel Ángel, aguarda en una cárcel mexicana a que haya un pronunciamiento final sobre su extradición a España para que responda por torturas y secuestro, en un proceso que ha abierto un campo nuevo en el derecho internacional.

Y también esta semana, la Corte Suprema de Guatemala ha retirado la inmunidad parlamentaria al general Efraim Ríos Montt, actual presidente del Congreso. Aunque no es por un hecho relacionado con los derechos humanos, este paso es la rendija por donde se pueden colar las investigaciones sobre las matanzas ocurridas en este país centroamericano.

En muy pocos años, la impunidad en la que se desenvolvían dictadores y generales golpistas latinoamericanos se ha venido abajo demostrando que era un edificio con cimientos de barro. Ahora son los antiguos dictadores y sus colaboradores quienes sienten la presión de poder ser detenidos, pero con una diferencia sustancial, porque ellos gozan de un régimen jurídico de garantías que negaron a sus víctimas.

No se pueden obviar los más de veinte años de obstinación y lucha de muchos supervivientes de las dictaduras de América, que han persistido en su intención de que paguen sus culpas los responsables y que durante más de dos décadas han sido objeto de desprecio, burla y escarnio. De ellos es esta gran victoria. Pero tampoco se puede olvidar que el gran desencadenante de esta situación no se produjo allí, sino en España, en el despaqueo del juez Baltasar Garzón, que instruye causas por los hechos ocurridos en Argentina y Chile y que el 16 de octubre de 1998 ordenó la detención en Londres de Augusto Pinochet.

El viejo dictador chileno era el símbolo de unos años aciagos para los derechos humanos. Encarnaba la soberbia del vencedor, la crueldad del triunfo y la impunidad de la fuerza. En suma, se trataba de un personaje fuera del alcance de cualquiera de sus conciudadanos. Pero todo esto varió con la decisión de Baltasar Garzón, que lo transformó en un hombre que debía responder de sus hechos.

La impunidad de los dictadores latinoamericanos se ha desvanecido desde España

Un simple papel firmado en España tuvo un efecto psicológico demoleedor. Si Garzón podía, ¿por qué no otros jueces llamados Guzmán Tapia o Cavallo? Y también otra consecuencia: ¿Podían dejar las Cortes Supremas que magistrados de otros países hicieran el trabajo que quedaba pendiente en sus naciones?

El resultado está ahí, y es arrollador. Pinochet dedica su tiempo a buscar fórmulas para eludir los tribunales y, a estas alturas del proceso, parece que sólo le queda una escapatoria: declararse mentalmente incapaz. El peor de los escenarios para el ex dictador y que su familia se obstina en no aceptar. Cruzando los Andes,

los Videla, Massera y compañía viven atemorizados ante la perspectiva de ser detenidos y encerrados.

Ni los más optimistas podían prever tal situación en abril de 1996, cuando el fiscal Carlos Castresana presentó en Madrid una querrela para que se investigara el genocidio en Argentina. Salvo en el caso de "La Vanguardia", el escepticismo se apoderó de los medios de comunicación españoles, que calificaron tal iniciativa como un "brindis al sol". Y el caso es que semejante brindis ha supuesto una monumental resaca para los generales y dictadores que aterrizaron sus respectivos países, hoy en día empachados del efecto Garzón, contra el cual ya no es posible un antídoto eficaz.

ÁLBUM DE CROMOS POR GUILLÉN

